

Gobernabilidad:

Tensiones y riesgos acumulados

Por Diseño Estratégico y Análisis Prospectivo.

En el escenario nacional, puede advertirse la configuración de saldos acumulados que están generando tensiones sociales y políticas que, eventualmente, podrían desembocar en situaciones de inestabilidad política, por dos grandes razones.



La primera es que, efectivamente, se están acumulando rezagos en los terrenos de la economía, la sociedad y la política. La segunda es que hay dos grandes líneas de acción política que atentan contra la seguridad nacional y la estabilidad política del régimen.

Una de ellas está constituida por los intereses políticos de importantes grupos que perfilan acciones desestabilizadoras con la finalidad de engrosar su capital político. La otra es la constitución de auténticos movimientos civiles que muestran su insatisfacción ante la grave crisis de seguridad que vive el país, así como los efectos de una economía que prácticamente no se mueve. Este campo, hay que apuntar las grandes movilizaciones por la seguridad, ocurridas a nivel nacional el pasado 30 de agosto, las cuales expresaron un punto político que coincide con los grupos lopezobradoristas: “Si no pueden, renuncien”.

Aunadas a estas expresiones, hubo otras durante los días 1 y 2 de septiembre: las múltiples marchas de protesta en la Ciudad de México. Estos últimos grupos están integrados por la movilización lopezobradorista y aliados (Coordina-

ción Nacional de Trabajadores de la Educación –CNTE–, Izquierda Unida del PRD, Sindicato Mexicano de Electricistas –SME–, estudiantes y las ONG); pero también por aquellas agrupaciones que buscan reposicionarse en el mapa político del país, especialmente la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y su alianza con Elba Esther Gordillo, que están buscando incrementar su fuerza política al unirse también al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con la mira puesta en las elecciones del 2009. Y a pesar de que representan intereses diversos, las marchas de esos dos días se nutrieron, en su base movilizada, de una situación económica que no ofrece alternativas ni posibilidades para los grupos populares.

Economía sin expectativas

Si atendemos al factor económico, puede observarse que las expectativas de crecimiento disminuyen continuamente, al tiempo en que ocurre una reducción en la actividad económica del principal socio comercial del país (EU) y que el crecimiento de los gigantes del mundo también asumen sus pausas (India, China y Europa han depreciado su actividad y desarrollo económicos).

El hartazgo social en materia de inseguridad es un referente político que impactará, sin duda, las elecciones del 2009; muestra los límites de una institucionalidad disfuncional que permanece a pesar de la alternancia política.

Entretanto, en México se registra una disminución en los ritmos de la inversión foránea. Además, la creación de empleos no se estimula ante las limitaciones que impone el bajo crecimiento y los retrasos en los programas extraordinarios, como el de infraestructura. La reducción de estos dinamismos, externo e interno, ya se ha reflejado en la baja del ingreso de divisas vía remesas, así como la desaceleración de los ritmos y los montos de la inversión extranjera, directa e indirecta.

Todo esto se suma al incremento de las tensiones provocadas por los aumentos en los precios de energéticos y alimentos a nivel mundial, cuyos impactos se observan en el país de manera constante y creciente. La amenaza permanente de una posible inflación descontrolada mantiene en vigilia a las autoridades hacendarias y monetarias (Banco de México) del país.

Economía y seguridad nacional

Adicionalmente, en la economía nacional debe considerarse el hecho de que la inseguridad pública tiene costos muy altos para la actividad económica. El pasado 2 de septiembre, el Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, estimó que el clima de inseguridad le resta a México “un punto porcentual de crecimiento económico”.

Si bien es cierto que el tema de la seguridad pública ha dominado el ambiente político nacional, es preciso indicar, de entrada, que el gran problema del país y de su gobierno radica en la gobernabilidad; es decir, que hay estructuras de gobierno que no son funcionales en lo económico ni en lo social.

En este sentido, vale apuntar que, no obstante la estabilidad macroeconómica, es indudable que el régimen político (a pesar de los esfuerzos gubernamentales) no favorece el crecimiento y el desarrollo económicos pues, como es sabido, el virtual estancamiento de la economía mexicana se ha mantenido, durante las últimas dos décadas, prácticamente sin poder dar un salto cualitativo que favorezca un crecimiento y desarrollo significativos.

Hasta ahora, los bajos índices de crecimiento anual sólo compensan el aumento de la población y su limitada demanda. En este terreno, la gobernabilidad apenas ha dado para estruc-

turar un control de las variables macroeconómicas, pero limitado en las posibilidades de generar un motor franco del crecimiento y del desarrollo. De ahí la importancia de las denominadas reformas estructurales. Esto último puede observarse con mayor claridad cuando se apunta el hecho de que, por razones de una muy limitada gobernabilidad, las reformas estructurales que el país necesita se pospusieron continuamente durante el pasado sexenio por razones políticas.

Adicionalmente, la crisis de seguridad que padece el país muestra los altos niveles de corrupción de los operadores institucionales y los grandes efectos sobre la economía y la sociedad. El hartazgo social en materia de inseguridad se ha convertido en un referente político que impactará, sin duda, la elección del 2009. Pero, sobre todo, también muestra los límites de una institucionalidad disfuncional que permanece a pesar de la alternancia política.

El fenómeno se entretene con un régimen cuyo apoyo político equivale a un tercio. Es una franca minoría que no tiene la capacidad de procesar los asuntos políticos y conflictos con pleno apego al Estado de Derecho, sino que tiene que recurrir a negociar siempre caso por caso. Lo grave es que la misma ley entra en este proceso de negociación de las fuerzas políticas.

Si se pregunta cuál es el resultado más importante de todo este complejo proceso, podría responderse que, cuando menos, es observable el crecimiento (en fuerza e influencia) de los poderes fácticos (muchos de ellos, de muy negativo signo, como la delincuencia organizada y las fuerzas políticas más corruptas del régimen anterior; por ejemplo, el Sindicato Magisterial y su lideresa, en proceso de alianza con el sindicato petrolero y otras corporaciones). Estas fuerzas, *de facto*, incluyen a los medios de comunicación y a Andrés Manuel López Obrador, cuyo movimiento fue concebido, creado y puesto en marcha con la única finalidad de generar condiciones de inestabilidad e ingobernabilidad.

La posible convergencia entre varios de estos factores deberá poner de relieve el hecho profundo de que la gobernabilidad del país está fundada en la negociación y no en la misma estructura política del régimen. He ahí su debilidad y las consecuencias que puedan surgir. ❁